



TOCA NÚMERO: 318-C-1C01/2024

EXPEDIENTE DE ORIGEN: 860/2022

MAGISTRADA PONENTE:
LIC. CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA

MATERIA: CIVIL

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
ANA MARITZA NURICUMBO FIGUEROA

**PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL,
ZONA 01 TUXTLA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO.-** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 15 quince de agosto
de 2024 dos mil veinticuatro.

V I S T O para resolver el toca número 318-C-1C01/2024,
formado con motivo al recurso de apelación interpuesto por la
parte actora **** *, en su carácter de ***** **
** *, en contra de la Sentencia Definitiva de 13 trece de
mayo de 2024 dos mil veinticuatro, dictada por la Jueza Primero
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, dentro del
expediente número 860/2022, relativo al Juicio de
PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido en la **VÍA ORDINARIA
CIVIL**, por **** *, en su carácter de ***** ** **
**** *, en contra de ***** ** *, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. En la fecha señalada en líneas que anteceden, el Juez del conocimiento dictó la sentencia combatida en apelación, misma que en sus puntos resolutivos literales reza lo siguiente:

“...**PRIMERO.-** En términos de lo establecido en el considerando tercero de esta resolución, no ha lugar a dictar una sentencia de fondo que ponga fin al presente **JUICIO ORDINARIO CIVIL DE PRESCRIPCIÓN POSITIVA**, promovido por *****, en su carácter de Presidente de la *****, en contra de *****, en consecuencia, -----
- - - **SEGUNDO.-** En términos del Considerando tercero, con fundamento en los artículos 55 y 660 del Código Procesal Civil para el Estado de Chiapas, se ordena **REPONER EL PROCEDIMIENTO**, y se declara **NULO TODO LO ACTUADO**, a partir del proveído de treinta de Junio del dos mil veintitrés; por ende, **SE DEJAN INSUBSISTENTES** todas las actuaciones realizadas con posterioridad a dicho proveído; dejando parcialmente subsistente el proveído de veinticuatro de Octubre del dos mil veintitrés lo anterior, en los términos aquí precisados.-
- - - **TERCERO.-** Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, y tomando en consideración los lineamientos de la misma, en primer término se ordena girar de nueva cuenta oficio a la *****, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo precisamente en el edificio denominado *****, para que informe si en sus registros o base de datos se encuentra domicilio de la demandada *****, con CURP: ***** y RFC: *****, teniendo como último domicilio el ubicado en *****, CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. En segundo término, y toda vez que se tuvo como nuevos domicilios para emplazar a la demandada *****, los ubicados en: *****, en consecuencia, tórnese los autos al ACTUARIO JUDICIAL, a fin de que CORRA TRASLADO Y EMPLACE a la citada demandada en los domicilio señalados con antelación y en los términos ordenados en proveído de once de octubre de dos mil veintidós.- Ahora bien, por cuanto que los domicilios señalados con anterioridad se encuentran fuera de este Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, con las inserciones necesarias, gírese atento exhorto AL C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, para que por su conducto sea remitido al JUEZ COMPETENTE DE ESE DISTRITO JUDICIAL, y en auxilio de las labores de éste Juzgado se sirva mandar a diligenciarlo; lo anterior en los términos aquí precisados. - - - - -
- - - - - **CUARTO.-** NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.”... (SIC).

SEGUNDO.- Mediante escrito fechado el 23 veintitrés de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, la parte actora **** *, en su carácter de **** *, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia referida, manifestando lo siguiente:

Me causa agravios los resolutivos Primero, Segundo y Tercero de la sentencia recurrida dictada el pasado 13 trece de mayo del 2024 dos mil veinticuatro, si bien es cierto que la hoy resolutora a su juicio encuentra fallas en el procedimiento de emplazamiento que se deba de desahogar, no debió de dictar sentencia sino mediante proveído o en su caso visto al respecto para dictar a lo que su entender hace falta, pues tal y como la misma lo detalla en el considerando II. Son sentencias Definitivas las resoluciones que ponen fin al juicio en lo principal, como en el presente caso, las cuales deben de ser claras, precisas, congruentes, fundadas en ley, condenando o absolviendo al demandado, pues como bien se indica en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, es claro manifestando que las resoluciones judiciales son: ... las sentencias definitivas, la resolución que pone fin al juicio principal. Es decir si el juez encontró deficiencias en el emplazamiento debió mediante proveídos calificar y llevar a cabo las diligencias necesarias y no por sentencias definitiva, la cual tiene por objeto poner fin al juicio inicial, por lo que considero es una agravio a las pretensiones que tengo al interponer la demanda en comento.

Me causa agravios el hecho de haber aprobado las etapas procesales como lo son el periodo de pruebas y de alegatos, ya que a la organización que represento, erogo gastos para los dictámenes presentados por los peritos, y es un desgaste económico para la organización que yo represento, y aunado a lo antes mencionado, pido a esta sala entre en estudio de este, ya que la omisión de este órgano resolutor nos provoca dilaciones procesales y un desgaste económico...” (SIC).

TERCERO.- El recurso fue admitido por el juzgado de origen mediante auto de 29 veintinueve de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, en AMBOS EFECTOS; en consecuencia, ordenó remitir los autos originales a la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, para la substanciación del recurso de apelación; así como dar vista a la parte contraria para contestar agravios, sin que ésta lo hiciera.

CUARTO.- La Presidencia de esta Sala, a través de acuerdo de 9 nueve de julio de dos mil veinticuatro, formó el presente toca y confirmó la calificación de grado hecha por la Jueza Natural en AMBOS EFECTOS; en consecuencia, al no haber diligencia pendiente de desahogar, ésta Sala revisora ordenó turnar el toca a la Magistrada ponente a efecto de que elaborara el proyecto de resolución y lo ponga a consideración del pleno, misma que ahora se engrosa; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado es competente para conocer y resolver sobre el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 686-A, del Código de Procedimientos Civiles, 49 y 59, fracción I, del Código de Organización del Poder Judicial ambos del Estado de Chiapas, por impugnarse una resolución de un juzgado de primera instancia ubicado dentro del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción ésta Sala Civil.

SEGUNDO. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Segunda instancia confirme, revoque o modifique la determinación judicial combatida, en términos de lo dispuesto por el artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.

TERCERO. Es importante precisar que el estudio del presente asunto deriva del Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, por ello, debe decirse que, el examen del tribunal de apelación se limitará a la sentencia apelada, a la luz de los razonamientos

jurídicos que realiza el inconforme en su respectivo agravio, atento al principio de estricto derecho que rige al recurso de apelación en materia civil; pues no nos encontramos en aquellos casos en que deba suplirse la deficiencia de los agravios en segunda instancia y a los que se refiere el artículo 680-A¹, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 1123, 1124, 1139, 1140 y 1144 del Código Sustantivo Civil en el Estado, la prescripción positiva es un medio para adquirir bienes mediante la posesión, debiéndose ostentar quien la promueva en concepto de propietario, en forma pacífica, continua y pública, por el término de cinco años, cuando la misma es de buena fe y de diez años cuando dicha posesión es de mala fe, debiéndose enderezar esa acción en contra del que aparezca como propietario del bien inmueble a *'usucapir'* en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y por ende se adquirió la propiedad.

De igual forma debe acreditarse la causa generadora de la posesión ya que uno de los requisitos para que opere la prescripción adquisitiva es que el bien a usucapir se posea con el carácter de propietario y tal calidad sólo puede ser calificada probándola con el justo título en donde no pueda dudarse de la existencia del acto jurídico que motiva el origen de la posesión y en caso de que dicho acto conste en títulos defectuosos el mismo debe ser de fecha cierta para demostrar que a partir de ahí la posesión que se tiene de los bienes es en concepto de propietario, debiéndose entender que la certeza de tales títulos

¹ ART. 680 A.- CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO DE JUICIO EN EL QUE INTERVENGAN COMO PARTES MENORES DE EDAD O INCAPACES, DEBERA SUPLIRSE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS, DE TAL MODO QUE QUEDEN PROTEGIDOS LOS DERECHOS DE LOS MISMOS.

se adquiere cuando han sido presentados ante un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes.

Robustece lo anterior la tesis jurisprudencial número VI.2o. J/6, visible en la página 374, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta I, Junio de 1995, Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto dice:

“USUCAPION. CAUSA GENERADORA DE LA POSESION. DEBE SEÑALARSE PROPORCIONANDO TODOS AQUELLOS DATOS QUE REVELAN SU EXISTENCIA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 1402 del Código Civil del Estado de Puebla, para que prospere la acción de usucapión es necesario que el actor pruebe la existencia del título que genere su posesión, esto es, la causa generadora de la misma, lo que se traduce en que el demandante está obligado a señalar el acto que originó la posesión, proporcionando paralelamente todos aquellos datos que revelen su existencia tales como la fecha y lugar exactos en que ocurrió, los sujetos que intervinieron y precisar la materia del acto, pero además debe demostrar todo esto, a fin de que el juzgador pueda determinar la calidad y naturaleza de la posesión, así como precisar el momento en que debe empezar a contar el plazo de la prescripción adquisitiva, pues sería insuficiente para que ésta procediera que, como causa generadora de la posesión, sólo se expresara aisladamente el acto que se cree bastante para transferir el dominio del bien sin señalar y demostrar aquellos presupuestos, en tanto tal circunstancia sólo daría lugar a presumir el acto de mérito, lo que no es suficiente para que opere la usucapión ya que éste debe ser acreditado plenamente”.

Así tenemos que el recurrente alega que le causa agravios los resolutivos primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida, bajo el argumento que si bien es cierto la resolutoria a su juicio encontró fallas en el procedimiento de emplazamiento que se debe de desahogar, no debió dictar sentencia sino mediante proveído o en su caso visto, al respecto para dictar a lo que su entender hace falta, pues tal como lo detalla en el considerando II, son sentencias definitivas, las resoluciones que



TOCA NÚMERO: 318-C-1C01/2024
EXPEDIENTE: 860/2022

ponen fin a un juicio en lo principal, como en el presente caso; por lo que si la juez encontró deficiencias en el emplazamiento debió mediante proveído calificar y llevar a cabo las diligencias necesarias y no por sentencia definitiva, la cual tiene por objeto poner fin al juicio inicial.

Asimismo refiere que le causa agravios, que se hayan aprobado las etapas procesales como lo son el periodo de pruebas y de alegatos, toda vez que la organización que representa, erogó gastos para los dictámenes presentados por los peritos, solicitando a la Sala que entre al estudio de éste, ya que la omisión del órgano resolutor provoca dilaciones procesales.

Los agravios **expresado por **** ***** ***** ******, en su carácter de ******* ** ** ***** ***** ***** ** ** ******* ***** ***** ** ***** ***** ******, resultan infundados e inoperantes, como consecuencia, insuficientes para revocar el sentido de la sentencia impugnada, como enseguida se justificará.

El argumento esgrimido por el recurrente, consistente en que si bien es cierto la resolutora a su juicio encontró fallas en el procedimiento de emplazamiento que se deba de desahogar, no debió dictar sentencia sino mediante proveído o en su caso visto, al respecto para dictar a lo que su entender hace falta, pues tal como lo detalla en el considerando II, son sentencias definitivas, las resoluciones que ponen fin a un juicio en lo principal, como en el presente caso; por lo que si la juez encontró deficiencias en el emplazamiento debió mediante proveído calificar y llevar a cabo las diligencias necesarias y no por sentencia definitiva, resulta inoperante, virtud que el hecho de que la juez de la causa, haya

emitido una resolución el 13 trece de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, a la cual la título sentencia definitiva, ello no le irroga ningún agravio al recurrente, debido a que de su contenido, se puede advierte de manera clara, que la primigenia no dictó una sentencia de fondo que ponga fin a un juicio, si no que ordenó reponer el procedimiento.

Lo anterior, virtud a que la primigenia, del análisis que realizó a las constancias procesales del juicio principal, advirtió que resultaba innecesario entrar al estudio del fondo de la acción planteada por la hoy actora, ya que de manera oficiosa observó la existencia de violaciones al procedimiento que por ser de orden público son de estudio preferente, toda vez que se trata del emplazamiento de la demanda, y al ser un acto que está investido de formalidades especiales, es necesario, que se realice conforme a la regla del debido procedimiento y se haga costar que se cumplieron con todas las formalidades y todos los requisitos señalados por la Ley; ya que tiene en el juicio una importancia tan fundamental, que si el reo resulta ilegalmente emplazado se viola su garantía de audiencia y, consecuentemente su violación implicaría nulidad del emplazamiento; reiterando que el emplazamiento es de orden público y debe examinarse de oficio en cualquier fase del procedimiento.

Asimismo, la A quo, asentó que la primera violación procesal se justificó con base a la razón actuarial de 26 veintiséis de mayo de 2023 dos mil veintitrés, en la que la actuara judicial adscrita al Juzgado Sexto Civil de Centro, Villahermosa, Tabasco, asentó la entrega de los oficios dirigidos a las siguientes dependencias: (CFE) Suministrador de Servicios Básicos, División Sureste; Teléfonos de México S.A.B. DE C.V.



(TELMEX); SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) y al H. Ayuntamiento del Centro y al Instituto Nacional Electoral (INE); a excepción del dirigido al SAT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), toda vez que el nombre de la dependencia buscada era incorrecto, pues la denominación correcta lo era ***** **
***** ** ***** ** ***** ** ** ** ** **, con domicilio en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; siendo precisamente en el edificio *****; por lo tanto, no se hizo entrega del mismo. Posterior a ello, como se advierte de autos, contestaron las dependencias requeridas, asimismo que se devolvió el referido exhorto al Órgano Jurisdiccional conocedor de la causa, sin que obrara constancia alguna de que se volvió a girar oficio con la debida razón social a la ***** **
***** ** ***** ** ***** ** ** ** **, siendo indispensable, pues para que se dictara una sentencia apegada a derecho, era necesario, el informe que rindiera la dependencia mencionada, pues podría informar que en su base de datos obrara algún domicilio, para la localización de la demandada.

Del mismo modo, la primiinstancial detalló que, la segunda violación procesal estriba en que los informes rendidos por las dependencias requeridas, respecto si en sus registros o base de datos se encontraba algún domicilio de la demandada; la única en proporcionar datos lo fue el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Villahermosa, Tabasco, México, a través de su Director de Asuntos Jurídicos, quien remitió con su informe el oficio número DF/UAJ/0175/2023, de veintinueve de Mayo del dos mil veintitrés, signado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Finanzas, por el cual informó al juzgado, que se encontraron dos predios en el Sistema de Ingresos Municipal, a nombre de la hoy demandada, siendo los ubicados en 1.-

***** ***, 2.- ***** **
*****; por lo que en atención a lo anterior, la parte
actora solicitó se girara el respectivo exhorto para realizar el
debido emplazamiento a la demandada en cualquiera de los
domicilios informados con antelación; por lo que se ordenó girar
atento exhorto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Tabasco, México, para que por su conducto lo
remitiera al Juez Competente del Ramo Civil en Turno y ordenara
diligenciarlo en sus términos; recayendo así para su desahogo
ante el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, México; quien
facultó a la actuario judicial Licenciada Guadalupe Flores
Narváez, para diligenciar el mismo, y quien se vio imposibilitada
de llevar a cabo la diligencia encomendada tal y como se advierte
de sus razones actuariales de catorce de Julio del dos mil
veintitrés a las nueve horas con veinte minutos y trece horas con
cincuenta minutos, respectivamente; de los que se advierte que
la citada actuario se constituyó al domicilio ubicado en *****
***** ***, manifestando en ambas
razones, que se encontró impedida para realizar la diligencia
encomendada, en virtud que no se le proporcionó alguna
referencia o sección, ya que pudo observar que en la *****
***** ***, las calles contienen nombre y los inmuebles
cuentan con sus respectivas numeraciones en orden ascendente;
sin embargo, cabe precisar en primer término, que si se
proporcionó número de sección, pues el domicilio correcto es el
ubicado en ***** ***, es
entonces que la fedataria judicial no se constituyó al domicilio
correcto proporcionado por el H. Ayuntamiento Constitucional de
Centro, Villahermosa, Tabasco; de ahí que, dicha diligencia de
conformidad con los artículos 74 y 76, en relación a los numerales
113 y 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado

Además que en el caso que nos ocupa, el emplazamiento a la demandada se realizó mediante edictos, y tratándose de este tipo de emplazamiento, el artículo 121, fracción II del Código Procesal de la materia en la Entidad, establece que procede cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora y deberá seguirse con los tramites y solemnidades a que se refiere el título décimo primero; por lo que el juzgador debe garantizar el cumplimiento del presupuesto esencial para que proceda ordenar este tipo de notificación, consistente en el desconocimiento del domicilio del demandado; siendo que en el presente caso no ocurrió, pues no se agotaron todos los medios que le pudieran otorgar a la suscrita juzgadora, certeza de que se desconoce plenamente el domicilio de la demandada *****
***** ** *****
***** **, lo anterior, con base a los razonamientos hechos en párrafos que anteceden. Por lo que no se puede descartar que, la ***** **
***** **, pudiera proporcionar otros domicilios de la hoy demandada para su debida localización y emplazamiento; así como también, que en

los domicilios ubicados en ***** y/o ***** , no viva la hoy demandada, pues bajo esas premisas se dejaría en estado de indefensión a la misma y violentando con ello el debido procedimiento a una adecuada defensa y al derecho de audiencia, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo, ello a la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento", pues debe realizarse de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso.

En tales consideraciones, para la primigenia no se agotaron todos los medios que pudieran otorgar la certeza de que se desconoce plenamente el domicilio de la demandada ***** ; pues tomando en consideración las violaciones procesales mencionadas en líneas que anteceden, no puede declarar por desconocido el domicilio de la demandada y poder realizar entonces el emplazamiento mediante los edictos correspondientes; toda vez que para ello, no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de

Sin embargo, este Tribunal de Alzada, estima que el recurrente no combate lo referente al emplazamiento, es decir no

realiza argumentos lógicos jurídicos, encaminados a acreditar que ésta se haya hecho con todas las formalidades de ley, puesto que la técnica jurídica exige que los agravios estén relacionados directa e inmediatamente con las consideraciones y fundamentos del fallo sujeto a revisión, lo cual no aconteció en el presente asunto, puesto que únicamente se limitó a manifestar que le causa agravio el hecho de que la primigenia haya titulado la resolución recurrida como sentencia definitiva, sin expresar argumentos lógicos jurídico, en contra de haber ordenado la reposición del procedimiento, por tanto, si el recurrente omitió rebatir las consideraciones en que se apoyó la juez natural, debe confirmarse la sentencia recurrida.

Máxime que las sentencias que no deciden el fondo del asunto, no viola los derechos de defensa ni de acceso a la justicia, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, virtud que deja a salvo los derechos del accionante; de ahí que tiene la posibilidad de instar de nueva cuenta y acceder a una resolución que dirima si le asiste el derecho o no, sin tener que agotar en una instancia diversa la revisión de la resolución que no decidió el fondo del asunto planteado.

Al presente caso, se aplica la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con registro digital: 2027924, Undécima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, página 6157, de cuyo rubro y epígrafe siguiente:

***“RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 372 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE***

AGUASCALIENTES, AL PREVER SU IMPROCEDENCIA CONTRA SENTENCIAS QUE NO DECIDEN EL FONDO DEL ASUNTO, NO VIOLA LOS DERECHOS DE DEFENSA NI DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Hechos: La parte actora interpuso y se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la vía especial hipotecaria que instó para solicitar la declaración de prescripción de un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, así como la cancelación de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; al respecto, la Sala civil declaró mal admitido el citado medio de impugnación, de conformidad con el artículo **372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes**, porque el fallo impugnado no estudió el fondo de la acción; inconforme con dicha determinación, promovió juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juzgado de Distrito remitió el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito en turno al estimar que el acto reclamado es una resolución que puso fin al juicio.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, al prever la improcedencia del recurso de apelación contra sentencias que no deciden el fondo del asunto, es constitucional y convencional, pues no viola los derechos de defensa ni de acceso a la justicia, previstos en los artículos **17 de la Constitución General** y **25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos**.

Justificación: Lo anterior, porque el citado artículo no excluye el derecho a la doble instancia de manera general, sino sólo respecto de las resoluciones que no deciden el fondo del negocio; sin embargo, ese aspecto no carece de razonabilidad, pues persigue una finalidad constitucionalmente legítima, si se tiene en cuenta que este tipo de determinaciones dan lugar a dejar a salvo los derechos del accionante; de ahí que tiene la posibilidad de instar de nueva cuenta y acceder a una resolución que dirima si le asiste el derecho o no, sin tener que agotar en una instancia diversa la revisión de la resolución que no decidió el fondo del asunto que planteó, lo que es acorde con el principio de impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, el justiciable puede ejercer el derecho a un procedimiento judicial sencillo y breve previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de la promoción del juicio de amparo que permite a los Jueces estudiar cuestiones de legalidad y violaciones procesales..." (sic).

Respecto al diverso argumento expuesto por el recurrente, consistente en que le causa agravio que se aprobaron las etapas

procesales, como lo son el periodo de pruebas y de alegatos, toda vez que la organización que representa, erogó gastos para los dictámenes presentados por los peritos, solicitando a la Sala que entre al estudio de éste, ya que la omisión del órgano resolutor provoca dilaciones procesales, deviene infundado; pues si bien es cierto, se llevaron a cabo todas las etapas procesales en el juicio que nos ocupa, partiendo del hecho de que mediante proveído de 19 diecinueve de septiembre de 2023 dos mil veintitrés, la juez de la causa, mandó a emplazar a la demandada

***** Y/O *****

por medio de edictos, sin que ésta diera contestación a la demanda dentro del término concedido para ello, decretándosele la correspondiente rebeldía mediante auto de 28 veintiocho de noviembre de 2023 dos mil veintitrés, además que la sentencia recurrida se declaró nulo el emplazamiento por edictos y se ordenó reponer el procedimiento para que se emplazara nuevamente a la demandada, por lo que tal consideración, no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, así como el pago realizado de los dictámenes presentados por los peritos, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación sufragó la parte actora del asunto que nos ocupa, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial, además en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga

procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen.

Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con registro digital: 2000789, Décima Época, Materia(s): Común, Civil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 741, de cuyo epígrafe y rubro siguiente:

“EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo **114, fracción IV, de la Ley de Amparo**, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su

contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio.”

En el caso particular, se advierte que la resolución reclamada tiene como objeto principal, la reposición del procedimiento y el emplazamiento de nueva cuenta a *****
***** ***** ***** *** ***** ***** ***** ***** ** ***** , a fin de entablar la litis en el Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil de este Distrito Judicial, con todas las formalidades de ley, de ahí, que es evidente que la resolución no constituye un acto de imposible reparación, dado que las consecuencias de ésta, son que la A quo integre debidamente el procedimiento del mismo, dado a la existencia a la violación al debido proceso que advirtió la A quo, en las constancias judiciales.

Lo anterior es así, toda vez que la reposición del procedimiento por sí misma no produce una afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo; es decir, se necesita que las consecuencias de dicha reposición del procedimiento produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del aquí recurrente, lo que en el caso no acontece, pues no se advierten situaciones que le causen afectación material a sus derechos sustantivos, pues se itera que en la resolución de primera instancia, se determinó reponer el procedimiento y llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio de origen, teniendo como finalidad que el emplazamiento, se

realice con todas las formalidades de ley, para no afectar los derechos de la parte demandada y no dejarla en estado de indefensión.

De ahí que la posible violación formal, con motivo de la reposición del procedimiento, por las violaciones al debido proceso en el emplazamiento de la parte demandada en el juicio natural, puede desaparecer si en la sentencia definitiva que se llegara a pronunciar, el recurrente obtiene sentencia favorable a sus intereses, pues se reparan y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse materialmente ningún derecho sustantivo, ya que al momento en que se producen no le afecta de manera irreparable, sino que ello será así en tanto que se resuelva la controversia, y tales actos influyan o sean tomados en cuenta, para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado.

Esto es, al constituir la sentencia recurrida, una resolución que ordena la reposición del procedimiento por el emplazamiento a la demandada en el juicio de origen, en la que no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que México es parte, como lo son los de libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; es evidente que, no es un acto de imposible reparación, que deban impugnarse a través del recurso de apelación.

Del mismo modo, debemos recordar que todo órgano jurisdiccional tiene la función de dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento y resolución, siempre y cuando se cumplan con las formalidades y requisitos de acuerdo a las disposiciones aplicables en la ley de la materia; así tenemos que, como quedó

plasmado en párrafos anteriores, el apelante no combatió las consideraciones plasmadas por la juez natural en la sentencia recurrida.

CUARTO: En las relatadas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los agravios expuestos por los disconformes, lo que procede es **CONFIRMAR** la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, motivado y fundado, esta Sala:

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Se **CONFIRMA** la sentencia definitiva de 13 trece de mayo de 2024 dos mil veinticuatro, pronunciada por la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el expediente número 860/2022, relativo al Juico de PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido en la VÍA ORDINARIA CIVIL, por **** *, **en su carácter de** **** *,
**** *,
**** *, en contra de **** *,
**** *.

SEGUNDO.- Con testimonio autorizado de la presente resolución, comuníquese al Juzgado Natural lo resuelto en este toca y devuélvase los autos originales y los documentos anexados al mismo. Oportunamente, archívese el toca como asunto concluido.

TERCERO.- Notifíquese y cúmplase.



Así lo resolvieron los Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciadas CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA, MARÍA ITZEL BALLINAS BARBOSA, y GUILLERMO HORACIO ESPONDA ORANTES, siendo presidenta y ponente la primera de los nombrados, y firman por ante la licenciada CLAUDIA VIDAL HERNÁNDEZ, Secretaria General de Acuerdos, que da fe.

CLDA/AMNF/acg.

MAGISTRADA PRESIDENTA

LIC. CLAUDIA LUCÍA DOMÍNGUEZ ACUÑA

MAGISTRADA PONENCIA “A”

LIC. MARÍA ITZEL BALLINAS BARBOSA

MAGISTRADO PONENCIA “B”

LIC. GUILLERMO HORACIO ESPONDA.
ORANTES

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LIC. CLAUDIA VIDAL HERNÁNDEZ

ELIMINADO: 46 elementos. **FUNDAMENTO LEGAL:** Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. **MOTIVO:** se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.